

- Ver fallos relacionados por :
- Tema
 - ♦ Comercial > Quiebras
 - ♦ Laboral > Indemnizaciones por término de contrato > Indemnización por Años de Servicio
- Ministros
 - ♦ Domingo Hernández Emparanza
 - ♦ Guillermo Silva Gundelach
 - ♦ Jorge Medina Cuevas
 - ♦ Juan Araya Elizalde
 - ♦ Sergio Muñoz Gajardo
- Legislación Aplicada
 - ♦ Código de Comercio art 131 Ley de Quiebras
 - ♦ Código de Comercio art 140 Ley de Quiebras
- Sentencia: Completa
- Tribunal Base
- Corte de Apelaciones
- Corte Suprema

N° Legal Publishing: 43510

Corte Suprema, 07/12/2009, 4046-2009

Agrícola e Industrial Lo Valledor AASA S.A. con Domingo Erazo Cadet y otros

Tipo: Recurso de Casación en el Fondo **Resultado:** Rechazado

Descriptor

Impugnación de créditos verificados; rechazada. Procedimiento de quiebras. Existencia de plazo para verificar créditos no impide verificar extraordinariamente créditos. Aumento de indemnizaciones por años de servicio de trabajadores del fallido. Aumento de prestaciones adeudadas. Pretensiones que no se han devengado después de la declaratoria de quiebra.

Doctrina

I. Que el artículo 131 de la Ley de Quiebras fije un plazo a los acreedores para que verifiquen sus créditos, es sólo para los efectos de que los acreedores que hagan sus verificaciones dentro del señalado plazo gocen de algunos beneficios que no gozarán los que verifiquen sus créditos en forma extraordinaria, pero en ningún caso hace precluir el derecho para verificar créditos en forma extraordinaria. A este respecto, el artículo 140 de la Ley precitada dispone que los acreedores que no hayan verificado oportunamente sus créditos o preferencias, podrán hacerlo mientras hayan fondos a repartir, en cualquier tiempo, para ser considerados en los repartos futuros, de lo que fluye que, al tenor de esta disposición, los acreedores podrán verificar sus créditos en forma extraordinaria en cualquier tiempo, aunque hayan verificado créditos en forma ordinaria. Entonces, no puede estimarse que la verificación de créditos que hicieron los demandados haya agotado el derecho que les otorga la ley (sentencia 1ª instancia)

II. Las pretensiones que hicieron valer los demandados, aumentos de indemnizaciones por años de servicio, no fueron devengadas u originadas después de la declaratoria de quiebra, sino corresponden a un aumento a las prestaciones adeudadas y cuyo crédito fue verificado. En consecuencia, la impugnación de créditos verificados debe ser rechazada en cuanto se sustenta en

que se han hecho valer pretensiones devengadas u originadas después de la declaratoria de quiebra (sentencia 1ª instancia).

Legislación aplicada en el fallo :

Código de Comercio art 131 Ley de Quiebras: CCOM_AR-131 Código de Comercio art 140 Ley de Quiebras: CCOM_AR-140

Ministros:

Domingo Hernández Emparanza; Guillermo Silva Gundelach; Jorge Medina Cuevas; Juan Araya Elizalde; Sergio Muñoz Gajardo

Texto completo de la Sentencia

Santiago, lunes treinta de abril de dos mil siete.

Resolviendo derechamente la objeción de fojas 2272:

Vistos:

El mérito de los antecedentes, los documentos que rolan de fojas 2152 a 2154 y lo señalado en el artículo 148 de la normativa del ramo, se resuelve que:

Ha lugar a la objeción de fojas 2272.

En consecuencia, corríjase por la sindicatura el Séptimo Reparto de Fondos, debiendo reservarse los montos de \$8.727.996, por concepto de seis meses de remuneraciones y de \$10.641.539, por concepto de aumentos de indemnizaciones por año de servicios, sin perjuicio del tope legal y de los descuentos de los abonos efectuados, a favor de los señores Domingo Erazo Cadet, Luis López Calderón, Luis Nibaldo Martínez Donoso, José Mueña Hormazábal y Roberto Sanchez Merino, todo dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de esta resolución, bajo apercibimiento. Oficiéase informado.

EN SANTIAGO, a lunes treinta de abril de dos mil siete, se notificó por el Estado Diario la resolución precedente.

Santiago, martes veintinueve de abril de dos mil ocho

A fojas 59:

Vistos, que a fojas 39, comparece don Pedro Pablo Vergara Varas, abogado, en representación de Agrícola e Industrial Lo Valledor AASA S.A., empresa industrial con domicilio en Calos Valdovinos Nº 3460, comuna Pedro Aguirre Cerda y para estos efectos en calle Morandé Nº 322, oficina 305, Santiago, quien de conformidad a lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley de Quiebras deduce demanda de impugnación del crédito verificado en autos por don Rafael Carvallo Santelices, en representación de los Sres. Domingo Erazo Cadet, Luis López Calderón, Luis Nibaldo Martínez Donoso, José Mueña Hormazábal y de Roberto Sánchez Merino.

Señala que el Sr. Carvallo verifica extraordinariamente créditos a favor de ex trabajadores de la

fallida, a quienes individualiza sólo por sus nombres, reclamando el pago de créditos por \$10.641.539. por una parte y por \$8.727.996. por otra, señala que los primeros son por aumento de indemnización por años de servicio y los segundos por remuneraciones de seis meses. Alega las preferencias de los N° 5 y 8, del artículo 2472, del Código de Procedimiento Civil, respectivamente.

Fundamenta esta impugnación, señalando en primer lugar que consta a fojas 868 de estos autos, que estas mismas personas, representadas también por el abogado don Rafael Carvallo, verificaron créditos en esta quiebra por un valor de \$9.913.402. con lo cual agotaron el derecho que les otorga la ley y no pueden volver a repetirlo a su voluntad; en segundo lugar, señala que no se ha cumplido con las formalidades o requisitos que dispone el artículo 133 de la Ley de Quiebras; y, en tercer lugar impugna el crédito verificado, en cuanto se hacer valer pretensiones devengadas u originadas después de la declaratoria de quiebra.

Por lo que en mérito de lo expuesto solicita tener por deducida demanda de impugnación del crédito verificado por don Rafael Carvallo Santelices, quien lo hace representando a los señores Domingo Erazo Cadet, Luis López Calderón, Luis Nibaldo Martínez Donoso, José Mueña Hormazábal y de Roberto Sánchez Merino, acogerla a tramitación y en conformidad a lo expuesto y lo dispuesto en las normas legales declarar que se hace lugar a la impugnación, declarando que el Sr. Carvallo, por sus representados, carece del derecho de pagarse de los créditos que ha verificado extraordinariamente a fojas 2.229, con costas.

Que a fojas 50, comparece doña Roxana Barrera Acuña, por los demandados quien evacua el traslado conferido, solicitando su rechazo total a la demanda de impugnación, por cuanto se verificación se funda en una sentencia que se encuentra ejecutoriada, según consta en autos.

Que respecto del fundamento primero de la impugnación es necesario señalar, que el hecho de que el legislador en el artículo 131 de la Ley de Quiebras fije un plazo a los acreedores para que verifiquen sus créditos, es sólo para los efectos de que los acreedores que hagan sus verificaciones dentro del señalado plazo gocen de algunos beneficios que no gozarán los que verifiquen sus créditos en forma extraordinaria, pero en ningún caso hace precluir el derecho de los demandados de autos de verificar créditos en forma extraordinaria, como es el caso en cuestión.

Que respecto del fundamento segundo de la impugnación, y habiendo analizado la verificación extraordinaria del crédito de fojas 2.229, se pudo establecer que dicha solicitud cumplió con lo señalado en el artículo 133 de la Ley de Quiebras, esto es, señalar lo que se les debe por concepto de capital e intereses y acompañando el título justificativo.

Que respecto del fundamento tercero, se hace presente que las pretensiones hechas valer por los demandados no fueron devengadas u originadas después de la declaratoria de quiebra, sino que son un aumento a las prestaciones adeudadas y cuyo crédito fue verificado.

Que es conveniente, además, tener presente lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley de Quiebras que señala Los acreedores que no hayan verificado oportunamente sus créditos o preferencias, podrán hacerlo mientras hayan fondos a repartir, en cualquier tiempo, para ser considerados en los repartos futuros, por lo que al tenor de la norma transcrita los acreedores podrán verificar sus créditos en forma extraordinaria en cualquier tiempo, aunque hayan verificado créditos en forma ordinaria.

Y, teniendo además presente, lo dispuesto en los artículos 5º y 141, de la Ley de Quiebras, se resuelve:

Que se rechaza la demanda de impugnación deducida a fojas 39 y siguientes de estos autos en contra del crédito verificado a fojas 2.229, cuaderno principal, tomo IV, por la suma de \$19.369.535.

Se condena en costas a la demandante.

Notifíquese solo por el estado diario.

A fojas 60: Certifíquese lo que corresponda.

Dictado por don Ricardo Núñez Videla, Juez titular, autoriza doña Astrid Benítez Rodríguez, Secretaria Subrogante.

Rol N° 6.397 2002.

Santiago, trece de marzo de dos mil nueve.

A fojas 298 y 299: téngase presente.

Vistos:

Se confirma la resolución apelada de treinta de abril de dos mil siete, escrita a fojas 153 de estos antecedentes.

Se confirma, asimismo, la resolución apelada de veintinueve de abril de dos mil ocho, escrita a fojas 241 y siguientes de las compulsas acumuladas ingreso Corte 3.160 2008.

Devuélvase con sus agregados.

Pronunciada por la Cuarta Sala de la Illma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministro señora Pilar Aguayo Pino, e integrada por la Ministro (S) señora Gloria Solís Romero y por el Abogado integrante señor Jorge Lagos Gatica.

N° 1.943 2008.

Santiago, siete de diciembre de dos mil nueve.

VISTOS:

En estos autos Rol N° 6.397 2002, del Decimoctavo Juzgado Civil de Santiago, sobre procedimiento de quiebra, caratulados "Ferias Osorno Limitada c/ Frigorífico Darc S.A.", con fecha veintiséis de enero de dos mil siete don Pedro Pablo Vergara Varas, abogado, en representación de Agrícola e Industrial Lo Valledor AASA S.A., de conformidad a lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley de Quiebras, dedujo demanda de impugnación de los créditos verificados en autos por don Rafael Carvallo Santelices, en representación de don Domingo Erazo Cadet, de don Luis López Calderón, de don Luis Nibaldo Martínez Donoso, de don José Muenza Hormazabal y de don Roberto Sánchez Merino, con fecha doce de diciembre de dos mil seis.

Funda su pretensión señalando, en primer lugar, que consta a fojas 868 de estos autos que estas mismas personas, representadas también por el abogado don Rafael Carvallo Santelices, verificaron créditos con anterioridad en esta misma quiebra por un total de \$9.913.402, con lo cual agotaron el derecho que al efecto les otorga la ley.

Expresa, además, que la presentación en la cual se verificaron los créditos que se objetan, no ha cumplido con las formalidades o requisitos que dispone el artículo 133 de la Ley de Quiebras.

Finalmente, sostiene que se impugna asimismo la aludida verificación de créditos por cuanto en ella se hacen valer obligaciones devengadas u originadas con posterioridad a la declaratoria de quiebra.

Solicita, en definitiva, se haga lugar a la impugnación que esgrime, declarando que los demandados carecen de derecho de pagarse de los créditos que han verificado extraordinariamente a fojas 2.229, con costas.

Evacuando el traslado de rigor, la contraparte solicitó su íntegro rechazo, aduciendo al efecto que la verificación de créditos presentada por su parte se funda en una sentencia que se encuentra ejecutoriada, según consta en estos mismos autos.

El veintinueve de abril de dos mil ocho, el señor juez titular del tribunal a quo dictó sentencia que rechazó, con costas, la demanda de impugnación deducida por Agrícola e Industrial Lo Valledor AASA S.A.

Apelado el fallo por la demandante una de las Salas de la Corte de Apelaciones de Santiago, lo confirmó.

En contra de esta última decisión, la aludida parte dedujo recurso de casación en el fondo.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente sostiene que la sentencia de segundo grado, que confirmó el fallo de primera instancia que, a su vez, negó lugar a la demanda de impugnación de créditos, ha sido dictada con infracción de disposiciones legales, según pasa a explicar:

a) Denuncia vulneración a los artículos 138, 140 y 141 de la Ley de Quiebras, en relación con los artículos 174, 175, 176 y 177 del Código de Procedimiento Civil y 19 y 22 del Código Civil, toda vez que, a su juicio, erróneamente, los sentenciadores han permitido que unos mismos acreedores procedan a verificar en una quiebra un mismo crédito en dos oportunidades diversas.

Sostiene que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Quiebras, en relación con los artículos precitados del Código de Procedimiento Civil, la consecuencia natural respecto de un crédito que no ha sido impugnado o del cual dicha impugnación ha sido rechazada por sentencia firme, es que se tenga por reconocido, no pudiendo ser o jeto de una impugnación o reclamación posterior.

Expresa que no cabe duda que un acreedor no puede reclamar en la quiebra el pago de un crédito y después ampliar esa pretensión, sin embargo, afirma, en este juicio no se ha discutido la facultad que tiene todo acreedor de verificar ordinaria o extraordinariamente su crédito, sino solamente si el acreedor cuyo crédito ya está reconocido, está o no facultado para volver a verificar nuevamente la misma acreencia fundada en unos mismos hechos.

Manifiesta que de haber los sentenciadores interpretado correctamente el artículo 138 de la Ley de Quiebras, debieron concluir que los acreedores representados por el abogado don Rafael Carvallo Santelices ya tenían sus créditos emanados de la antigua relación laboral con la fallida, debidamente reconocidos, razón por la cual no era procedente una nueva verificación. Asimismo, agrega, los jueces de la instancia no habrían hecho referencia a lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley de Quiebras, desde el momento en que la oportunidad para verificar un crédito no ha sido una materia discutida en estos autos;

b) Estima infringidos los artículos 133 y 131 de la Ley de Quiebras.

Señala que el legislador ha sido meticuloso al tiempo de regular las exigencias que debe contener un escrito de verificación de créditos básicamente porque quiere velar por la "par conditio creditorum", de forma tal de no beneficiar a unos acreedores en perjuicio del resto de la masa.

En este entendido, argumenta que la solicitud de verificación debe indicar, para los efectos del artículo 131, la cantidad que en concepto del actor se le debe en capital e intereses y debe acompañarse de los títulos justificativos de sus créditos, cuestión que la verificación impugnada de fojas 2.228 no hace, ya que siendo una pretensión a favor de diversos trabajadores, se limita a formular "al bulto" una pretensión colectiva, sin detallar cuanto corresponde a cada uno y la razón u origen de tales ítems.

Afirma que la exigencia de precisión es absolutamente relevante, porque en materia laboral los derechos que da el contrato de trabajo son individuales y, de otro lado, están sujetos a límites particulares, diferentes para cada trabajador. Agrega que, además, algunas prestaciones de carácter laboral están investidas parcialmente de preferencias, que no son en ningún caso acumulables o cesibles por un trabajador a favor de otro.

Sostiene que la verificación de créditos objetada no detalla lo que se debe por capital y lo que corresponde por concepto de intereses y que, peor aún, hace referencia a multas o pagos en exceso ordenados por el tribunal, créditos éstos que no gozan de preferencia alguna.

c) Señala transgredidos los artículos 64 y 66 de la Ley de Quiebras, en relación con el artículo 162 inciso quinto del Código del Trabajo y 4º y 13 del Código Civil.

Manifiesta que el artículo 66 de la Ley de Quiebras contempla el llamado principio de "petrificación del patrimonio falencial", al decir que la "declaratoria de quiebras fija irrevocablemente los derechos de todos los acreedores en el estado que tenían al día de su pronunciamiento".

Indica que la norma precitada se halla, además, en estrecha relación con el artículo 64 de la misma ley, toda vez que, en razón de la declaratoria de quiebras se verifica el desasimio del fallido y, por consiguiente, al quedar éste inhibido de la administración de sus bienes, no puede luego alterar el pasivo de la quiebra.

Señala que en la especie, sobre la base de lo dispuesto en el artículo 162 inciso quinto del Código del Trabajo, los jueces de la instancia han extendido los efectos de una indemnización laboral por no pago de cotizaciones previsionales mas allá de la fecha en que se declaró la quiebra, infringiéndose de esta forma, el artículo 66 en comento, toda vez que la declaratoria de quiebra fue pronunciada el 27 de enero de 2003 y en la especie se invocan prestaciones devengadas hasta el mes de julio de 2003.

Afirma que existiendo una antinomia entre los artículos 66 de la Ley, de Quiebras y 162 inciso quinto del Código del Trabajo, los sentenciadores debieron aplicar el principio de la especialidad contemplado en los artículos 4º y 13 del Código Civil.

d) Estima infringidos los artículos 169 letra a) del Código del Trabajo, en relación con el artículo 2472 Nº 8 del Código Civil.

Expresa que al tiempo de verificar su crédito, el representante de los trabajadores sostuvo que "respecto del aumento de indemnizaciones por años de servicio, alego la preferencia establecida en el artículo 2472 Nº 8 del Código Civil". Sucede empero, asevera, que el artículo 169 letra a) inciso final del Código del Trabajo, no contempla un caso de indemnización por años de servicio, sino el del pago de una multa por infracción al artículo 162 del Código del Trabajo.

De este modo, afirma, si la condena dictada por el juez del trabajo y que sirve de fundamento al crédito "malamente" verificado en autos, lo fue por concepto de multa, la infracción al artículo 2472 Nº 8 del Código Civil es palmaria, ya que el privilegio que allí se establece lo es sólo para las indemnizaciones por años de servicio y no para las multas a que haya lugar;

SEGUNDO: Que el recurrente, si bien en el primer capítulo de su escrito de casación denuncia que se han quebrantado las disposiciones de los artículos 138, 140 y 141 de la Ley de Quiebras, los artículos 174, 175, 176 y 177 del Código de Procedimiento Civil, en relación con los artículos 19 y 20 del Código Civil, al desarrollar sus argumentaciones restringió el análisis sólo al artículo 138 de la referida ley, de manera que este tribunal, verificara si respecto de él se ha producido una errada interpretación;

TERCERO: Que, sin embargo, su afirmación referida a que los sentenciadores han permitido que un acreedor verifique en la quiebra un crédito ya verificado y reconocido, no se fundamenta en ninguna cita de resoluciones anteriores que permita asentar sus dichos, comparando una y otras, dejando de esta manera inconclusa su propuesta de nulidad, y en cuanto a la falta de cita del artículo 140, que echa de menos, ello contraría la realidad del dictamen de fojas 241 y 242 de autos, de fecha 29 de abril de 2008, confirmados en segunda instancia, sin modificaciones;

CUARTO: Que, conforme a lo expuesto precedentemente, aparece claro que en este acápite del recurso, no ha dado cumplimiento a las exigencias contenidas en los Nºs. 1 y 2 del artículo 768 del Código de Procedimiento puesto que no ha explicado en que consiste el error o errores de que adolece la sentencia objetada ni de que manera, ese o esos errores, han influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo y sin referirse, además, a la norma del artículo 148 de la ley ya citada, que constituye el fundamento de la sentencia objetada (fechada el treinta de abril de dos mil siete). A mayor abundamiento, tampoco se explicó en forma clara y pormenorizada, la supuesta infracción del inciso 1º del artículo 140 como ya se expresó que sostiene la sentencia de veintinueve de abril de dos mil ocho, resoluciones que fueron confirmadas sin modificaciones, por la Corte de Apelaciones respectiva;

QUINTO: Que, por lo observado precedentemente, el recurso carece de fundamentos y por ello, en esta parte, debe decidirse por su rechazo;

SEXTO: Que en un segundo capítulo, se denuncia la infracción de los artículos 131 y 133 de la ley en estudio, por cuanto, en su entender, no se ha explicitado lo que se le debe en capital e intereses al acreedor, expresando que se trata de una pretensión colectiva atañe a diversos trabajadores sin detallar lo que a cada uno corresponde y que algunos de ellos están investidos de preferencias que no son acumulables;

SÉPTIMO: Que del examen de los antecedentes de la causa, aparece a fojas 82 de este cuaderno (fojas 2.229 de autos originales), que el abogado Rafael Carvalho Santelices, con fecha 12 de diciembre de 2006 verificó, por sus representados, Domingo Erazo, Luis López Calderón, Luis Nibaldo Martínez, José Muena y Roberto Sánchez Merino, expresando que el título de sus créditos es la sentencia definitiva y ejecutoriada dictada por el Séptimo Juzgado del Trabajo de Santiago, en causa rol Nº 1.128 2003, caratulada "Erazo con Frigorífico DARC" cuya copia se agregó a fojas 81 o fojas 2.228 de autos originales y en ella se aprecia claramente el detalle de las deudas y de lo que a cada uno de los interesados corresponde, razones que motivaron que la sentencia de veintinueve de abril de dos mil ocho, rechazara la impugnación interpuesta por el abogado don Pedro Pablo Vergara Varas, en representación de Agrícola e Industrial Lo Valledor S.A.

Así, queda en evidencia que esta parte del recurso carece de sustentación en los hechos, podo que se debe rechazar;

OCTAVO: Que, por otra parte, y en un tercer capítulo, el recurso sostiene que se han violentado los artículos 64 y 66 de la Ley de Quiebras en relación con el inciso 5º del artículo 162 Del Código del Trabajo y los artículos 4º y 13 del Código Civil al extender los jueces de la instancia, los efectos de una indemnización laboral por el no pago de cotizaciones previsionales más allá de la fecha en que se declaró la quiebra del empleador, dejando sin aplicar el principio de especialidad contenido en las normas del Código Civil ya citadas, dado que la Ley de Quiebras debe anteponerse en su aplicación a las normas de derecho común de la legislación laboral;

NOVENO: Que la sentencia de los falladores de la instancia, razona en forma diferente a la que sostiene el conductor del recurso, afirmando que las prestaciones hechas valer por los ex trabajadores, no se originaron en forma posterior a la declaratoria de quiebra, sino que constituyen un aumento de las prestaciones adeudadas y cuyo crédito ya había sido verificado, estimando que pueden verificarse en esta etapa y ser considerados en su oportunidad, mientras existan fondos en los repartos futuros, conforme a lo dispuesto en el artículo 140 de la ley.

En consecuencia, no existe la falta de aplicación de las normas legales específicas sobre la materia, sino precisamente una acertada aplicación de las mismas, y en atención a esta cabal aplicación de las normas atacadas, debe desecharse también este motivo de nulidad;

DÉCIMO: Que, en el último capítulo de su presentación, el recurrente denuncia como quebrantados lo dispuesto en los artículos 169 letra a) del Código del Trabajo en relación con el artículo 2472 N° 2 del Código Civil y al efecto señala que el aumento del pago contemplado en el Código Laboral, no constituye una indemnización sino el pago de una multa, y en razón de ello, no podía ser considerado, como privilegio para ser pagado y, además, sostiene que se habría devengado después de la declaratoria de quiebra;

UNDÉCIMO: Que como ya se dijo, respecto de la oportunidad en que se devengaron los montos verificados a favor de los ex trabajadores de la fallida, ello es anterior a la declaratoria de quiebra y sólo hace posible determinar dichos derechos una vez ejecutoriada la sentencia que así lo declaró, situación que los interesados no podían alterar por su sola voluntad.

Por otra parte, si bien dicho aumento en el monto de las indemnizaciones es considerado por algunos litigantes en material laboral como "multa" la verdad es que no tiene ninguna de las características que esa sanción debe contener y sólo se traduce en un aumento de las indemnizaciones a favor de los ex trabajadores porque su ex empleadora no dio cumplimiento, en forma oportuna, al apago o entero de las cotizaciones previsionales ya descontadas a los demandantes en el juicio laboral señalado.

Así, la resolución de treinta de abril de dos mil siete (citada erróneamente en el recurso de casación analizado, como fechada el treinta de abril de dos mil ocho) y confirmada en segunda instancia el trece de marzo del año en curso, se encuentra ajustada a las leyes.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas y en los artículos 765 y 767 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto a fojas 303 por el abogado don Juan Pablo Morales Barros, en representación de Agrícola e Industrial Lo Valledor AASA S.A., en contra de la sentencia de trece de marzo de dos mil nueve, escrita a fojas 300.

Regístrese y devuélvase.

Redacción del Abogado Integrante, don Jorge Medina Cuevas.

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema, por los Ministros Sres. Sergio Muñoz G., Juan Araya E. y Guillermo Silva G. y Abogados Integrantes Sres. Jorge Medina C. y Domingo Hernández E.

No firma el Ministro Sr. Araya, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por estar con permiso.

Autorizado por la Secretaria Sra. Rosa María Pinto Egusquiza.

Rol N° 4.046 2009.

Tribunal de Letras, 30/04/2007, 6397-2002

Texto Sentencia Tribunal Base:

Santiago, lunes treinta de abril de dos mil siete.

Resolviendo derechamente la objeción de fojas 2272:

Vistos:

El mérito de los antecedentes, los documentos que rolan de fojas 2152 a 2154 y lo señalado en el

artículo 148 de la normativa del ramo, se resuelve que:

Ha lugar a la objeción de fojas 2272.

En consecuencia, corríjase por la sindicatura el Séptimo Reparto de Fondos, debiendo reservarse los montos de \$8.727.996, por concepto de seis meses de remuneraciones y de \$10.641.539, por concepto de aumentos de indemnizaciones por año de servicios, sin perjuicio del tope legal y de los descuentos de los abonos efectuados, a favor de los señores Domingo Erazo Cadet, Luis López Calderón, Luis Nibaldo Martínez Donoso, José Mueña Hormazábal y Roberto Sanchez Merino, todo dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de esta resolución, bajo apercibimiento. Oficiéase informado.

EN SANTIAGO, a lunes treinta de abril de dos mil siete, se notificó por el Estado Diario la resolución precedente.

Santiago, martes veintinueve de abril de dos mil ocho

A fojas 59:

Vistos, que a fojas 39, comparece don Pedro Pablo Vergara Varas, abogado, en representación de Agrícola e Industrial Lo Valledor AASA S.A., empresa industrial con domicilio en Calos Valdovinos N° 3460, comuna Pedro Aguirre Cerda y para estos efectos en calle Morandé N° 322, oficina 305, Santiago, quien de conformidad a lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley de Quiebras deduce demanda de impugnación del crédito verificado en autos por don Rafael Carvallo Santelices, en representación de los Sres. Domingo Erazo Cadet, Luis López Calderón, Luis Nibaldo Martínez Donoso, José Mueña Hormazábal y de Roberto Sánchez Merino.

Señala que el Sr. Carvallo verifica extraordinariamente créditos a favor de ex trabajadores de la fallida, a quienes individualiza sólo por sus nombres, reclamando el pago de créditos por \$10.641.539. por una parte y por \$8.727.996. por otra, señala que los primeros son por aumento de indemnización por años de servicio y los segundos por remuneraciones de seis meses. Alega las preferencias de los N° 5 y 8, del artículo 2472, del Código de Procedimiento Civil, respectivamente.

Fundamenta esta impugnación, señalando en primer lugar que consta a fojas 868 de estos autos, que estas mismas personas, representadas también por el abogado don Rafael Carvallo, verificaron créditos en esta quiebra por un valor de \$9.913.402. con lo cual agotaron el derecho que les otorga la ley y no pueden volver a repetirlo a su voluntad; en segundo lugar, señala que no se ha cumplido con las formalidades o requisitos que dispone el artículo 133 de la Ley de Quiebras; y, en tercer lugar impugna el crédito verificado, en cuanto se hacer valer pretensiones devengadas u originadas después de la declaratoria de quiebra.

Por lo que en mérito de lo expuesto solicita tener por deducida demanda de impugnación del crédito verificado por don Rafael Carvallo Santelices, quien lo hace representando a los señores Domingo Erazo Cadet, Luis López Calderón, Luis Nibaldo Martínez Donoso, José Mueña Hormazábal y de Roberto Sánchez Merino, acogerla a tramitación y en conformidad a lo expuesto y lo dispuesto en las normas legales declarar que se hace lugar a la impugnación, declarando que el Sr. Carvallo, por sus representados, carece del derecho de pagarse de los créditos que ha verificado extraordinariamente a fojas 2.229, con costas.

Que a fojas 50, comparece doña Roxana Barrera Acuña, por los demandados quien evacua el traslado conferido, solicitando su rechazo total a la demanda de impugnación, por cuanto se verificación se funda en una sentencia que se encuentra ejecutoriada, según consta en autos.

Que respecto del fundamento primero de la impugnación es necesario señalar, que el hecho de que el legislador en el artículo 131 de la Ley de Quiebras fije un plazo a los acreedores para que verifiquen sus créditos, es sólo para los efectos de que los acreedores que hagan sus verificaciones dentro del señalado plazo gocen de algunos beneficios que no gozarán los que verifiquen sus créditos en forma extraordinaria, pero en ningún caso hace precluir el derecho de los demandados de autos de verificar créditos en forma extraordinaria, como es el caso en cuestión.

Que respecto del fundamento segundo de la impugnación, y habiendo analizado la verificación extraordinaria del crédito de fojas 2.229, se pudo establecer que dicha solicitud cumplió con lo señalado en el artículo 133 de la Ley de Quiebras, esto es, señalar lo que se les debe por concepto de capital e intereses y acompañando el título justificativo.

Que respecto del fundamento tercero, se hace presente que las pretensiones hechas valer por los demandados no fueron devengadas u originadas después de la declaratoria de quiebra, sino que son un aumento a las prestaciones adeudadas y cuyo crédito fue verificado.

Que es conveniente, además, tener presente lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley de Quiebras que señala Los acreedores que no hayan verificado oportunamente sus créditos o preferencias, podrán hacerlo mientras hayan fondos a repartir, en cualquier tiempo, para ser considerados en los repartos futuros , por lo que al tenor de la norma transcrita los acreedores podrán verificar sus créditos en forma extraordinaria en cualquier tiempo, aunque hayan verificado créditos en forma ordinaria.

Y, teniendo además presente, lo dispuesto en los artículos 5º y 141, de la Ley de Quiebras, se resuelve:

Que se rechaza la demanda de impugnación deducida a fojas 39 y siguientes de estos autos en contra del crédito verificado a fojas 2.229, cuaderno principal, tomo IV, por la suma de \$19.369.535.

Se condena en costas a la demandante.

Notifíquese solo por el estado diario.

A fojas 60: Certifíquese lo que corresponda.

Dictado por don Ricardo Núñez Videla, Juez titular, autoriza doña Astrid Benítez Rodríguez, Secretaria Subrogante.

Rol Nº 6.397 2002.

Corte de Apelaciones de Santiago, 13/03/2009, 1943-2008

Texto Sentencia Corte de Apelaciones :

Santiago, trece de marzo de dos mil nueve.

A fojas 298 y 299: téngase presente.

Vistos:

Se confirma la resolución apelada de treinta de abril de dos mil siete, escrita a fojas 153 de estos antecedentes.

Se confirma, asimismo, la resolución apelada de veintinueve de abril de dos mil ocho, escrita a fojas 241 y siguientes de las compulsas acumuladas ingreso Corte 3.160 2008.

Devuélvase con sus agregados.

Pronunciada por la Cuarta Sala de la Illma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministro señora Pilar Aguayo Pino, e integrada por la Ministro (S) señora Gloria Solís Romero y por el Abogado integrante señor Jorge Lagos Gatica.

Nº 1.943 2008.

Corte Suprema, 07/12/2009, 4046-2009

Texto Sentencia Corte Suprema:

Santiago, siete de diciembre de dos mil nueve.

VISTOS:

En estos autos Rol Nº 6.397 2002, del Decimoctavo Juzgado Civil de Santiago, sobre procedimiento de quiebra, caratulados "Ferias Osorno Limitada c/ Frigorífico Darc S.A.", con fecha veintiséis de enero de dos mil siete don Pedro Pablo Vergara Varas, abogado, en representación de Agrícola e Industrial Lo Valledor AASA S.A., de conformidad a lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley de Quiebras, dedujo demanda de impugnación de los créditos verificados en autos por don Rafael Carvalho Santelices, en representación de don Domingo Erazo Cadet, de don Luis López Calderón, de don Luis Nibaldo Martínez Donoso, de don José Muenia Hormazabal y de don Roberto Sánchez Merino, con fecha doce de diciembre de dos mil seis.

Funda su pretensión señalando, en primer lugar, que consta a fojas 868 de estos autos que estas mismas personas, representadas también por el abogado don Rafael Carvalho Santelices, verificaron créditos con anterioridad en esta misma quiebra por un total de \$9.913.402, con lo cual agotaron el derecho que al efecto les otorga la ley.

Expresa, además, que la presentación en la cual se verificaron los créditos que se objetan, no ha cumplido con las formalidades o requisitos que dispone el artículo 133 de la Ley de Quiebras.

Finalmente, sostiene que se impugna asimismo la aludida verificación de créditos por cuanto en ella se hacen valer obligaciones devengadas u originadas con posterioridad a la declaratoria de quiebra.

Solicita, en definitiva, se haga lugar a la impugnación que esgrime, declarando que los demandados carecen de derecho de pagarse de los créditos que han verificado extraordinariamente a fojas 2.229, con costas.

Evacuando el traslado de rigor, la contraparte solicitó su íntegro rechazo, aduciendo al efecto que la verificación de créditos presentada por su parte se funda en una sentencia que se encuentra ejecutoriada, según consta en estos mismos autos.

El veintinueve de abril de dos mil ocho, el señor juez titular del tribunal a quo dictó sentencia que rechazó, con costas, la demanda de impugnación deducida por Agrícola e Industrial Lo Valledor AASA S.A.

Apelado el fallo por la demandante una de las Salas de la Corte de Apelaciones de Santiago, lo confirmó.

En contra de esta última decisión, la aludida parte dedujo recurso de casación en el fondo.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente sostiene que la sentencia de segundo grado, que confirmó el fallo de primera instancia que, a su vez, negó lugar a la demanda de impugnación de créditos, ha sido dictada con infracción de disposiciones legales, según pasa a explicar:

a) Denuncia vulneración a los artículos 138, 140 y 141 de la Ley de Quiebras, en relación con los artículos 174, 175, 176 y 177 del Código de Procedimiento Civil y 19 y 22 del Código Civil, toda vez que, a su juicio, erróneamente, los sentenciadores han permitido que unos mismos acreedores procedan a verificar en una quiebra un mismo crédito en dos oportunidades diversas.

Sostiene que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Quiebras, en relación con los artículos precitados del Código de Procedimiento Civil, la consecuencia natural respecto de un crédito que no ha sido impugnado o del cual dicha impugnación ha sido rechazada por sentencia firme, es que se tenga por reconocido, no pudiendo ser o jeto de una impugnación o reclamación posterior.

Expresa que no cabe duda que un acreedor no puede reclamar en la quiebra el pago de un crédito y después ampliar esa pretensión, sin embargo, afirma, en este juicio no se ha discutido la facultad que tiene todo acreedor de verificar ordinaria o extraordinariamente su crédito, sino solamente si el acreedor cuyo crédito ya está reconocido, está o no facultado para volver a verificar nuevamente la misma acreencia fundada en unos mismos hechos.

Manifiesta que de haber los sentenciadores interpretado correctamente el artículo 138 de la Ley de Quiebras, debieron concluir que los acreedores representados por el abogado don Rafael Carvallo Santelices ya tenían sus créditos emanados de la antigua relación laboral con la fallida, debidamente reconocidos, razón por la cual no era procedente una nueva verificación. Asimismo, agrega, los jueces de la instancia no habrían hecho referencia a lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley de Quiebras, desde el momento en que la oportunidad para verificar un crédito no ha sido

una materia discutida en estos autos;

b) Estima infringidos los artículos 133 y 131 de la Ley de Quiebras.

Señala que el legislador ha sido meticuloso al tiempo de regular las exigencias que debe contener un escrito de verificación de créditos básicamente porque quiere velar por la "par conditio creditorum", de forma tal de no beneficiar a unos acreedores en perjuicio del resto de la masa.

En este entendido, argumenta que la solicitud de verificación debe indicar, para los efectos del artículo 131, la cantidad que en concepto del actor se le debe en capital e intereses y debe acompañarse de los títulos justificativos de sus créditos, cuestión que la verificación impugnada de fojas 2.228 no hace, ya que siendo una pretensión a favor de diversos trabajadores, se limita a formular "al bulto" una pretensión colectiva, sin detallar cuanto corresponde a cada uno y la razón u origen de tales ítems.

Afirma que la exigencia de precisión es absolutamente relevante, porque en materia laboral los derechos que da el contrato de trabajo son individuales y, de otro lado, están sujetos a límites particulares, diferentes para cada trabajador. Agrega que, además, algunas prestaciones de carácter laboral están investidas parcialmente de preferencias, que no son en ningún caso acumulables o cesibles por un trabajador a favor de otro.

Sostiene que la verificación de créditos objetada no detalla lo que se debe por capital y lo que corresponde por concepto de intereses y que, peor aún, hace referencia a multas o pagos en exceso ordenados por el tribunal, créditos éstos que no gozan de preferencia alguna.

c) Señala transgredidos los artículos 64 y 66 de la Ley de Quiebras, en relación con el artículo 162 inciso quinto del Código del Trabajo y 4º y 13 del Código Civil.

Manifiesta que el artículo 66 de la Ley de Quiebras contempla el llamado principio de "petrificación del patrimonio falencial", al decir que la "declaratoria de quiebras fija irrevocablemente los derechos de todos los acreedores en el estado que tenían al día de su pronunciamiento".

Indica que la norma precitada se halla, además, en estrecha relación con el artículo 64 de la misma ley, toda vez que, en razón de la declaratoria de quiebras se verifica el desasimio del fallido y, por consiguiente, al quedar éste inhibido de la administración de sus bienes, no puede luego alterar el pasivo de la quiebra.

Señala que en la especie, sobre la base de lo dispuesto en el artículo 162 inciso quinto del Código del Trabajo, los jueces de la instancia han extendido los efectos de una indemnización laboral por no pago de cotizaciones previsionales mas allá de la fecha en que se declaró la quiebra, infringiéndose de esta forma, el artículo 66 en comento, toda vez que la declaratoria de quiebra fue pronunciada el 27 de enero de 2003 y en la especie se invocan prestaciones devengadas hasta el mes de julio de 2003.

Afirma que existiendo una antinomia entre los artículos 66 de la Ley, de Quiebras y 162 inciso quinto del Código del Trabajo, los sentenciadores debieron aplicar el principio de la especialidad contemplado en los artículos 4º y 13 del Código Civil.

d) Estima infringidos los artículos 169 letra a) del Código del Trabajo, en relación con el artículo

2472 Nº 8 del Código Civil.

Expresa que al tiempo de verificar su crédito, el representante de los trabajadores sostuvo que "respecto del aumento de indemnizaciones por años de servicio, alego la preferencia establecida en el artículo 2472 Nº 8 del Código Civil". Sucede empero, asevera, que el artículo 169 letra a) inciso final del Código del Trabajo, no contempla un caso de indemnización por años de servicio, sino el del pago de una multa por infracción al artículo 162 del Código del Trabajo.

De este modo, afirma, si la condena dictada por el juez del trabajo y que sirve de fundamento al crédito "malamente" verificado en autos, lo fue por concepto de multa, la infracción al artículo 2472 Nº 8 del Código Civil es palmaria, ya que el privilegio que allí se establece lo es sólo para las indemnizaciones por años de servicio y no para las multas a que haya lugar;

SEGUNDO: Que el recurrente, si bien en el primer capítulo de su escrito de casación denuncia que se han quebrantado las disposiciones de los artículos 138, 140 y 141 de la Ley de Quiebras, los artículos 174, 175, 176 y 177 del Código de Procedimiento Civil, en relación con los artículos 19 y 20 del Código Civil, al desarrollar sus argumentaciones restringió el análisis sólo al artículo 138 de la referida ley, de manera que este tribunal, verificara si respecto de él se ha producido una errada interpretación;

TERCERO: Que, sin embargo, su afirmación referida a que los sentenciadores han permitido que un acreedor verifique en la quiebra un crédito ya verificado y reconocido, no se fundamenta en ninguna cita de resoluciones anteriores que permita asentar sus dichos, comparando una y otras, dejando de esta manera inconclusa su propuesta de nulidad, y en cuanto a la falta de cita del artículo 140, que echa de menos, ello contraría la realidad del dictamen de fojas 241 y 242 de autos, de fecha 29 de abril de 2008, confirmados en segunda instancia, sin modificaciones;

CUARTO: Que, conforme a lo expuesto precedentemente, aparece claro que en este acápite del recurso, no ha dado cumplimiento a las exigencias contenidas en los Nºs. 1 y 2 del artículo 768 del Código de Procedimiento puesto que no ha explicado en que consiste el error o errores de que adolece la sentencia objetada ni de que manera, ese o esos errores, han influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo y sin referirse, además, a la norma del artículo 148 de la ley ya citada, que constituye el fundamento de la sentencia objetada (fechada el treinta de abril de dos mil siete). A mayor abundamiento, tampoco se explicó en forma clara y pormenorizada, la supuesta infracción del inciso 1º del artículo 140 como ya se expresó que sostiene la sentencia de veintinueve de abril de dos mil ocho, resoluciones que fueron confirmadas sin modificaciones, por la Corte de Apelaciones respectiva;

QUINTO: Que, por lo observado precedentemente, el recurso carece de fundamentos y por ello, en esta parte, debe decidirse por su rechazo;

SEXTO: Que en un segundo capítulo, se denuncia la infracción de los artículos 131 y 133 de la ley en estudio, por cuanto, en su entender, no se ha explicitado lo que se le debe en capital e intereses al acreedor, expresando que se trata de una pretensión colectiva atañe a diversos trabajadores sin detallar lo que a cada uno corresponde y que algunos de ellos están investidos de preferencias que no son acumulables;

SÉPTIMO: Que del examen de los antecedentes de la causa, aparece a fojas 82 de este cuaderno (fojas 2.229 de autos originales), que el abogado Rafael Carvallo Santelices, con fecha 12 de

diciembre de 2006 verificó, por sus representados, Domingo Erazo, Luis López Calderón, Luis Nibaldo Martínez, José Muena y Roberto Sánchez Merino, expresando que el título de sus créditos es la sentencia definitiva y ejecutoriada dictada por el Séptimo Juzgado del Trabajo de Santiago, en causa rol N° 1.128 2003, caratulada "Erazo con Frigorífico DARC" cuya copia se agregó a fojas 81 o fojas 2.228 de autos originales y en ella se aprecia claramente el detalle de las deudas y de lo que a cada uno de los interesados corresponde, razones que motivaron que la sentencia de veintinueve de abril de dos mil ocho, rechazara la impugnación interpuesta por el abogado don Pedro Pablo Vergara Varas, en representación de Agrícola e Industrial Lo Valledor S.A.

Así, queda en evidencia que esta parte del recurso carece de sustentación en los hechos, podo que se debe rechazar;

OCTAVO: Que, por otra parte, y en un tercer capítulo, el recurso sostiene que se han violentado los artículos 64 y 66 de la Ley de Quiebras en relación con el inciso 5º del artículo 162 Del Código del Trabajo y los artículos 4º y 13 del Código Civil al extender los jueces de la instancia, los efectos de una indemnización laboral por el no pago de cotizaciones previsionales más allá de la fecha en que se declaró la quiebra del empleador, dejando sin aplicar el principio de especialidad contenido en las normas del Código Civil ya citadas, dado que la Ley de Quiebras debe anteponerse en su aplicación a las normas de derecho común de la legislación laboral;

NOVENO: Que la sentencia de los falladores de la instancia, razona en forma diferente a la que sostiene el conductor del recurso, afirmando que las prestaciones hechas valer por los ex trabajadores, no se originaron en forma posterior a la declaratoria de quiebra, sino que constituyen un aumento de las prestaciones adeudadas y cuyo crédito ya había sido verificado, estimando que pueden verificarse en esta etapa y ser considerados en su oportunidad, mientras existan fondos en los repartos futuros, conforme a lo dispuesto en el artículo 140 de la ley.

En consecuencia, no existe la falta de aplicación de las normas legales específicas sobre la materia, sino precisamente una acertada aplicación de las mismas, y en atención a esta cabal aplicación de las normas atacadas, debe desecharse también este motivo de nulidad;

DÉCIMO: Que, en el último capítulo de su presentación, el recurrente denuncia como quebrantados lo dispuesto en los artículos 169 letra a) del Código del Trabajo en relación con el artículo 2472 N° 2 del Código Civil y al efecto señala que el aumento del pago contemplado en el Código Laboral, no constituye una indemnización sino el pago de una multa, y en razón de ello, no podía ser considerado, como privilegio para ser pagado y, además, sostiene que se habría devengado después de la declaratoria de quiebra;

UNDÉCIMO: Que como ya se dijo, respecto de la oportunidad en que se devengaron los montos verificados a favor de los ex trabajadores de la fallida, ello es anterior a la declaratoria de quiebra y sólo hace posible determinar dichos derechos una vez ejecutoriada la sentencia que así lo declaró, situación que los interesados no podían alterar por su sola voluntad.

Por otra parte, si bien dicho aumento en el monto de las indemnizaciones es considerado por algunos litigantes en material laboral como "multa" la verdad es que no tiene ninguna de las características que esa sanción debe contener y sólo se traduce en un aumento de las indemnizaciones a favor de los ex trabajadores porque su ex empleadora no dio cumplimiento, en forma oportuna, al apago o entero de las cotizaciones previsionales ya descontadas a los demandantes en el juicio laboral señalado.

Así, la resolución de treinta de abril de dos mil siete (citada erróneamente en el recurso de casación analizado, como fechada el treinta de abril de dos mil ocho) y confirmada en segunda instancia el trece de marzo del año en curso, se encuentra ajustada a las leyes.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas y en los artículos 765 y 767 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto a fojas 303 por el abogado don Juan Pablo Morales Barros, en representación de Agrícola e Industrial Lo Valledor AASA S.A., en contra de la sentencia de trece de marzo de dos mil nueve, escrita a fojas 300.

Regístrese y devuélvase.

Redacción del Abogado Integrante, don Jorge Medina Cuevas.

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema, por los Ministros Sres. Sergio Muñoz G., Juan Araya E. y Guillermo Silva G. y Abogados Integrantes Sres. Jorge Medina C. y Domingo Hernández E.

No firma el Ministro Sr. Araya, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por estar con permiso.

Autorizado por la Secretaria Sra. Rosa María Pinto Egusquiza.

Rol N° 4.046 2009.